

INFORME DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA AL PROYECTO DE REGLAMENTO DE REUTILIZACIÓN DE SENTENCIAS Y OTRAS RESOLUCIONES JUDICIALES

I. Dudas sobre la base legal del Reglamento.

El proyecto objeto de informe afirma que desarrolla la competencia del artículo 107.10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dentro del marco que, sobre reutilización de la información del sector público, ofrece la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, ley básica dictada al amparo del artículo 149.1.18 CE¹ y que traspone la Directiva 2003/98/CE, de 17 de noviembre². Reutilización que se concibe como el uso de documentos en poder de la Administración que no constituya una actividad administrativa pública, tanto con fines comerciales como no comerciales³. Parece claro que el Poder Judicial, creador de los documentos objeto del proyecto, queda fuera del concepto de Administración u organismo del sector público. No se incluye en la delimitación de la Ley 37/2007 al establecer el ámbito subjetivo de aplicación⁴, aunque sí podrían subsumirse las resoluciones judiciales en su ámbito

¹ Disposición Final Primera de la Ley. El título competencial invocado, 149.1.18 CE, alude a «las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de los funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas».

² La Ley se dicta tras haber sido condenada España, al igual que sucediera con Austria, Bélgica y Luxemburgo, por haber incumplido las obligaciones impuestas por la Directiva 2003/98, en STJCE de 2 de septiembre de 2007, C-465/06, Comisión c. España, dada la falta de especificidad, precisión y claridad de la normativa existente en la materia requeridas por la Directiva para dar satisfacción a la exigencia de seguridad jurídica.

³ Artículo 3.1 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre.

⁴ Artículo 2 de la Ley 37/2007.

objetivo⁵. De hecho, tanto la Ley como Directiva aluden a las sentencias y resto de resoluciones dentro del ámbito objetivo como documentos objeto de posible reutilización en cuanto «conservados» por la Administración. De ahí que el CGPJ, a través del CENDOJ, concebido como uno de sus órganos técnicos⁶, teniendo atribuida la función de publicación oficial de sentencias y otras resoluciones de órganos judiciales por el artículo 107.10 LOPJ, aproveche la regulación.

Sin embargo, el CGPJ es un órgano constitucional que, sin perjuicio de las funciones administrativas que tenga encomendadas, escapa a la consideración de Administración dada por la Constitución y la Ley⁷. Y si bien el artículo 2 de la Directiva 2003/98/CE alude a las Administraciones y organismos del sector público en sentido amplio permitiendo la inclusión de la información judicial dentro de la del sector público objeto de regulación, el artículo 2 de la Ley 37/2007 es más restrictivo y sólo alude a Administraciones en un sentido estricto del término. Ciertamente que la Disposición Adicional Segunda amplía su aplicación a los documentos «conservados» por otros organismos o instituciones distintos. Pero han de regirse por la Ley 30/1992, lo que no sucede ni con el CGPJ ni con su órgano técnico, el CENDOJ, y la extensión que se hace a sentencias y resoluciones judiciales en el número 2º de la citada disposición lo *sin perjuicio* del artículo 107.10 LOPJ y no en aplicación del mismo. Tampoco la Ley 37/2007 invoca título competencial respecto a este órgano constitucional pues sólo alude al artículo 149.1.18 CE.

Además, aun cuando entre las funciones atribuidas se encuentra la publicación oficial de las sentencias y otras resoluciones previa recopilación, tratamiento, difusión y certificación, sólo se hace con la finalidad de «velar por su integridad, autenticidad y acceso, así como para asegurar el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos personales» (artículo 107.10 LOPJ).

⁵ Artículo 3 de la Ley 37/2007.

⁶ Artículo 1 de su Reglamento 1/1997 del Centro de Documentación Judicial, aprobado por Acuerdo de 7 de mayo de 1997, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial.

⁷ El CGPJ se regula necesariamente por Ley Orgánica (en concreto, en la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial) conforme dispone el artículo 122 CE, ubicado en el Título VI de la Constitución, dedicado al Poder Judicial. Claramente no se rige por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (2 de la Ley 30/1992) y de ahí la previsión específica del artículo 1.3 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa 29/1998, de 13 de julio, para someter sus actos administrativos al control de la jurisdicción contenciosa.

En este contexto puede plantearse la duda de si la aplicación lo es por la reutilización de sentencias y resoluciones judiciales «conservadas» por las distintas Administraciones (Ministerio de Justicia y administraciones autonómicas con competencias transferidas), excluyendo al CGPJ en cuanto no es Administración. Máxime cuando anteriores Acuerdos del CGPJ, al atribuir competencias al CENDOJ, han sido recurridos previamente por reutilizadores de sentencias⁸.

II. Excesivo interés mercantilista del CGPJ.

La Directiva 2003/98/CE, de 17 de noviembre, reguladora de la reutilización de la información del sector público autoriza el cobro de tarifas por el suministro de documentación⁹, aunque permite la completa gratuidad del servicio¹⁰. Pero cuando contempla la reutilización sin condiciones o con condiciones, en su caso a través de una licencia, también hace un llamamiento al principio de proporcionalidad al establecer que **«estas condiciones no restringirán sin necesidad las posibilidades de reutilización y no se usarán para restringir la competencia»**¹¹. De ahí que la Ley de trasposición española en materia reutilización de la información del sector público abra la posibilidad de diferenciar, a efectos de imposición de la tasa o precio público, entre los fines comerciales y no comerciales de la reutilización¹². Incluso cuando el régimen sea el de licencia se contempla posible gratuidad¹³. Sin embargo, pese al principio de publicidad de sentencias, con carácter general, y de acceso a las resoluciones judiciales, en sentido más estricto, el proyecto procede al cobro de un precio público tanto para fines comerciales como no comerciales. El Preámbulo del proyecto, consciente de la opción que realiza, justifica esta decisión calificándola de «responsabilidad presupuestaria». Sin embargo y a diferencia de otros documentos administrativos, aquí sólo se incluyen los costes de recopilación, conversión de formato, eliminación de datos personales de no haberlo

⁸ SSTS Sala 3ª, sec. 7ª, 13-9-2000, rec. 44/1998; 7-2-2000, rec. 526/1997 y sec. 1ª, 3-3-1995, rec. 1218/91.

⁹ Artículo 6 de la Directiva.

¹⁰ Considerando 14 de la Directiva.

¹¹ Artículo 8.1 de la Directiva.

¹² Ver artículo 7.4 de la Ley 37/2007.

¹³ Artículo 9 de la Ley 37/2007.

hecho el juzgado, y puesta a disposición de reutilizadores, pero no los costes de creación, pues estos se imputan al Poder Judicial y a la administración de justicia que dota de herramientas al efecto. Y a diferencia de la Directiva y la Ley en cuyo marco dice desarrollarse, centra su regulación en la gestión de licencias y autorizaciones haciendo prevalecer el rendimiento económico por la gestión de documentos sobre otros valores jurídicos, incluida la formación de futuros juristas, incluso Jueces y Magistrados¹⁴.

Uno de los obstáculos que aprecia la Comisión al analizar la aplicación de la Directiva¹⁵ es el **intento de los organismos del sector público de maximizar la recuperación de los costes**. También alude a que varios **estudios** (entre ellos uno de la Universidad de Cambridge) **señalan** que **la gratuidad o las tarifas limitadas** exclusivamente a los costes marginales (costes de reproducción y difusión de los documentos) **maximizan la reutilización de la información del sector público**, y que los beneficios sociales y económicos compensan con creces los beneficios financieros inmediatos de la recuperación de costes. Por ello la Directiva recomienda este planteamiento en sus considerandos. La tarificación basada en los costes marginales constituye, según la comunicación, uno de los principios esenciales de la recomendación de la OCDE recientemente adoptada para mejorar el acceso y la eficacia de la utilización de la información pública, según el citado Informe. Y el dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema Internet de los objetos y reutilización de la información del sector público parece ir por el mismo camino¹⁶.

Por su parte, ha de recordarse que las sentencias son públicas por imperativo constitucional (artículo 120 CE). Directiva y Ley de trasposición reconocen la publicidad de los documentos de libre disposición en poder del sector público, entre los que cita expresamente los judiciales, como instrumento esencial del derecho al conocimiento, principio básico de la democracia. De hecho, el propio Proyecto de Reglamento alude en su preámbulo¹⁷ a la conjugación de dos finalidades básicas que considera compatibles: la consulta telemática *gratuita* de cualquier ciudadano a través del buscador ofrecido por el CENDOJ y la reutilización

¹⁴ Mientras que La Ley 37/2007 recoge las tres modalidades de gestión, no las desarrolla centrándose en el resto de principios y garantías. Sin embargo, el Proyecto olvida hacer escasa mención a éstas y desarrolla principalmente estas modalidades y el régimen de prohibiciones y sanciones.

¹⁵ Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Reutilización de la información del sector público: revisión de la Directiva 2003/98/CE – [SEC(2009) 597] COM/2009/0212 final.

¹⁶ DO C 175 de 1.7.2010, p. 35/3.

¹⁷ § V, párrafo segundo

en condiciones de licencia y a cambio de un precio público a los llamados «*infomediarios*». Sin embargo, siendo gratuita la consulta telemática inicial, la utilización posterior de ese producto se somete a un régimen de autorizaciones y licencias **cuando no sea una utilización ocasional y aislada**, bien de las partes¹⁸, bien finalidad informativa, docente, cultural o científica¹⁹. Esta publicidad gratuita y en línea casa mal con una utilización posterior sometida a restricciones y, en todo caso, a una de las modalidades de gestión²⁰. Y en cuanto al acceso a las sentencias por interesados, la Ley 38/2007 afirma no modificar el régimen general de acceso proclamado a nivel constitucional y de ahí que su establecimiento lo sea «sin perjuicio» de este principio (artículo 1). Sin embargo, el texto del proyecto parece volver a un sistema de acceso por

¹⁸ Artículo 2.3.f del Proyecto.

¹⁹ Artículo 4.1 del Proyecto. Todo ello sin perjuicio de la diferenciación que el Tribunal Supremo hace entre publicidad y acceso a las sentencias para salvar los recursos interpuestos reutilizadores con fines comerciales. Sin embargo, estas sentencias se centran en una específica forma de reutilización y con un sistema de acceso a sentencias claramente más restrictivo que el actual regulado por el **Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales. El actual artículo 5 establece que** «los Secretarios y funcionarios competentes de la Oficina judicial facilitarán a las partes interesadas y a cuantos manifiesten y justifiquen un interés legítimo y directo, cuanta información soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, que podrán examinar y conocer, salvo que sean o hubieren sido declaradas secretas conforme a la Ley».

²⁰ Expresamente lo establece el artículo 2.4 del Proyecto. Las sentencias del Tribunal Supremo reseñadas, al examinar el derecho y correlativo deber de conocimiento y acceso al texto de las resoluciones judiciales, lo gradúa en función de tres diversos ámbitos o esferas de afectación. Una de máxima amplitud o de afectación generalizada, que comprende al público o los ciudadanos en general, sin cualificación específica y que corresponde a la publicidad de las actuaciones judiciales desarrolladas en todo clase de procesos, que permite a aquellos acudir a la práctica de diligencias que han de tener lugar "en audiencia pública", salvo la declaración de reserva (art. 120.1 CE y 232.1 LOPJ). En el extremo opuesto, de máxima restricción del ámbito de conocimiento de las decisiones judiciales, se hallan los actos de notificación y comunicación de éstas, dirigidos sólo a quienes revisten la condición de parte procesal (art. 270 de la LOPJ). Y Ocupando una posición intermedia, las actuaciones procesales ya finalizadas, incluidas las sentencias, integradas en libros, archivos o registros judiciales, a los que se reconoce del derecho de acceso a los interesados (art. 235 y. 266.1 LOPJ). Al delimitar la condición de "interesado" que legitima, según la Ley, el acceso a las sentencias depositadas en las Secretarías, la jurisprudencia citada entiende que sólo puede reconocerse en quien acredita una conexión de carácter concreto y singular, bien con el objeto mismo del proceso, bien con alguno de los actos procesales. Conexión que se halla sujeta a dos condicionamientos. 1º, Que no afecte a derechos fundamentales de las partes procesales o de quienes de algún modo hayan intervenido en el proceso. 2º, Que si la información es utilizada, como actividad mediadora, para satisfacer derechos o intereses de terceras personas, y en consecuencia adquiere, como es el caso, un aspecto de globalidad o generalidad por relación no a un concreto proceso, tal interés se mantenga en el propio ámbito del ordenamiento jurídico y de sus aplicadores, con carácter generalizado, pues otra cosa sería tanto como hacer partícipe o colaborador al órgano judicial en tareas o actividades que, por muy lícitas que sean, extravasan su función jurisdiccional.

interesados a través del CENDOJ conforme se desprende del artículo 2.3 del Proyecto, sin una modificación paralela del artículo 5 del Reglamento 1/2005. Máxime cuando la Directiva prevé la exclusión de documentos para cuyo acceso se requiere un interés legítimo²¹.

Dentro del uso libre de resoluciones que proclama el proyecto, no ha sido generoso permitiendo el acceso gratuito y sin restricciones cuando su destino sean universidades o proyectos de investigación rigurosos que enriquecen a futuros juristas y a la propia comunidad jurídica, incluido el Poder Judicial. El uso docente está muy limitado y puede redundar en la actividad profesional de Jueces y Magistrados cuando publican artículos o textos.

En este contexto cabe la duda de la afectación, al quedar fuera de la estricta función judicial, de la propia redacción de artículos o publicaciones por componentes del Poder Judicial, incluidas actividades de formación o impartición de clases en universidades, salvo que se interprete de forma extensiva la exclusión del artículo 2.3.a del Reglamento²². El proyecto exige, no sólo la carencia de finalidad comercial, sino también el carácter ocasional y la escasa entidad en el número de *ítems* que comprenda cuando la finalidad de la reutilización sea informativa, docente, cultural o científica²³. *Sensu contrario*, cabe interpretar que un uso generoso de sentencias se incluye dentro del ámbito de sometimiento a autorización, que no hay que olvidar incluye reutilización no comercial y permite la exacción de un precio público por ello²⁴. El acceso a las resoluciones debería ir presidido por otros principios, menos crematísticos, destinados a generar comunidades de saber con acceso libre al conocimiento, en beneficio de la propia comunidad científica y que finalmente redundaría en beneficio del propio producto objeto de reutilización: las resoluciones judiciales.

Cuando menos, sería deseable que el Reglamento no acudiese a conceptos jurídicos tan indeterminados que permitieran toda clase de interpretaciones dependiendo del Consejo de turno. Y sorprende la prohibición de uso y de distribución que se impone a los propios Jueces y Magistrados, obligando casi a medir el número de resoluciones que se puedan citar

²¹ Artículo 3.3.c de la Ley, 1.3 de la Directiva. Los archivos y registros judiciales y en concreto, las sentencias y resoluciones extendidas y firmadas, serán de acceso libre en la Oficina Judicial sólo a los interesados (artículo 235 y 266 de la LOPJ). En el sentido interpretado por el Tribunal Supremo, se insiste en un sistema de acceso más restringido, este concepto se acercaba peligrosamente al de interés legítimo.

²² Cesión o intercambio a organismos del sector público dentro del ejercicio de las públicas que tienen atribuidas.

²³ Artículo 4 del Proyecto.

²⁴ Artículo 7 del Proyecto.

en una ponencia o texto de un curso de formación, sea del CGPJ, de la Escuela de Práctica Jurídica, o de otros foros.

III. Falta de previsión del destino de la recaudación.

Es el Poder Judicial el que crea las resoluciones judiciales objeto de la normativa. De ellas son Jueces y Magistrados sus exclusivos responsables pudiendo alcanzar el ámbito penal y disciplinario. Sin embargo, es el CGPJ quien va a rentabilizar este esfuerzo judicial en beneficio propio (el CGPJ tiene presupuesto propio) sin prever un incremento de los servicios que proporciona al Poder Judicial pese a los recortes presupuestarios que se anuncian en la actualidad. La previsión es del cobro de un precio público de 1,50 €/resolución cuando la finalidad es comercial, y de 0,50 €/resolución cuando el fin no es comercial, según se establece el anexo, lo que en el caso de determinadas reutilizaciones (ej. bases de datos) pueden reportar grandes beneficios. En todo caso, al límite superior del precio público.

El CGPJ no aprovecha la ocasión para incentivar a aquellas iniciativas editoriales que aunque ofrecen menos dinero en concepto de licencia/*royaltie*, sin embargo se comprometan a facilitar el acceso de los jueces a libros o productos editoriales vinculados a la tarea jurisdiccional que suelen ser muy caros (acceso a bases de datos *Premium*, productos de software o de hardware a los Jueces...) como hacen con muchos abogados que, cuando se suscriben a determinados productos exclusivos, se les facilita la compra a bajo precio de portátiles de última generación o las nuevas tabletas para lectura de *E-book*).

IV. Principios de competencia y no discriminación aplicables al CENDOJ.

Con el fin de garantizar la competencia leal y la no discriminación²⁵, si los organismos públicos (léase CENDOJ) reutilizan sus propios documentos para producir servicios de valor añadido en competencia con otros reutilizadores, deberán aplicarse a todos las mismas tarifas y condiciones. La comunicación de la Comisión ya aludida recuerda este principio y alude a la separación contable entre la misión de servicio público y las actividades comerciales de los organismos del sector público, pues así se contribuye al logro de este objetivo, teniendo en

²⁵ artículo 10.2 de la Directiva y artículo 7.3 de la Ley española 37/2007.

cuenta determinados límites y criterios que impone el Derecho comunitario según la interpretación del TJCE, hoy TJUE. También han de recordarse los principios contrarios a la exclusividad²⁶. Si bien el proyecto no contempla la actividad empresarial del CENDOJ, nada impide que así se desarrolle en un futuro, por lo que no puede operar con ventajas respecto de otras bases de datos, principalmente, cuando en la actualidad es un producto menos competitivo en el mercado dada la ausencia de datos esenciales para los operadores jurídicos (sólo contiene resoluciones de órganos judiciales, no del Tribunal Constitucional ni de otras instancias internacionales), ni se combina con legislación, en sus distintas versiones temporales e incluyendo normativa autonómica y comunitaria. *De facto* esta centralización podría colocarle en una situación de privilegio frente a otros reutilizadores.

Por lo demás, se echa en falta un régimen transitorio que precisase el régimen de información suministrada con anterioridad, principalmente a las grandes editoriales, previendo sólo una revisión de acuerdos y convenios en vigor pero sin establecer régimen alguno que introduzca seguridad sobre el material previamente facilitado.

V. Régimen sancionador.

Mención aparte merece la introducción de prohibiciones y extensión correlativa del régimen sancionador y disciplinario²⁷ al poder conectar algunas infracciones con el régimen disciplinario de Jueces, Tribunales y personal de la Administración de Justicia por quebranto del deber de confidencialidad. Como fundamento del régimen sancionador, el Proyecto invoca en el Preámbulo el artículo 11.6 de la Ley 37/2007, precepto que remite al ejercicio de la potestad sancionadora regulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 127.1 y 2 de la citada ley, que expresamente excluye de su ámbito el régimen disciplinario. Sin embargo, no sólo amplía sanciones sino que contempla la responsabilidad disciplinaria de este personal. Máxime cuando Jueces y Magistrados forman parte del Poder Judicial, por lo que en ningún caso se les aplica la citada Ley 30/1992 sino que se rigen en materia disciplinaria por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se estima que no es posible la ampliación por vía reglamentaria y sin cobertura legal de infracciones sancionadores ni disciplinarias.

²⁶ Artículo 11 de la Directiva y 6 de la Ley 37/2007.

²⁷ Artículos 3.5 y 8 y ss del Reglamento.

El régimen sancionador en general carece de la suficiente cobertura legal cuando amplía los supuestos recogidos en el artículo 11 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. No sólo incluye en el régimen sancionador infracciones sólo autorizadas para el régimen de licencia en la Ley, sino que sanciona otras conductas no contempladas en el texto legal del que dice trae causa. Así sucede con la alteración de los marcadores electrónicos, la reincidencia, la reutilización de resoluciones no obtenidas a través del CENDOJ salvo que se efectúe a través de un acto que no constituya reutilización²⁸, la cesión a terceros de la licencia o ficheros salvo en concepto de producto de valor añadido, y la facilitación directa de resoluciones a reutilizadores por Juzgador, Tribunales, Unidades de apoyo o Servicios Comunes²⁹. Aun cuando no es un vicio estricto del Proyecto de reglamento sino que se arrastra de la propia Ley 37/2007, responde mal al principio de legalidad un sistema de infracciones en que la tipificación no sólo es excesivamente abierta, sino que se califica en la propia definición (incumplimiento muy grave, grave y leve, para cada una de las posibles infracciones). Por lo demás, nuevamente introduce confusión y marca una línea de inseguridad inadmisibles en el ámbito sancionador cuando la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 235 y 266, y el Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, permiten el libre acceso por los interesados a estas resoluciones en la propia Oficina Judicial, cuando el acceso se concibe en estos preceptos en la propia Oficina Judicial.

VI. Otras deficiencias técnicas.

Se aprecian problemas técnicos como que no se exija que en las resoluciones que se reutilicen se indique si son firmes, ya que esa falta de información puede generar algunos espejismos de jurisprudencia al considerar doctrina algunas sentencias que en muchas ocasiones no han adquirido firmeza o incluso han sido revocadas. El Proyecto debería exigir que en todo caso esa información se hiciera pública en lugar de otros datos menos esenciales.

²⁸ Expresamente lo somete a alguna de las modalidades de gestión conforme al artículo 2.4 del Proyecto.

²⁹ Artículos 8.5 y 9.5 del Reglamento.

Al margen de confundir la fecha que ha de ser mencionada, que no es la del material objeto de reutilización sino de la última actualización³⁰, este dato resulta más innecesario que la firmeza de una resolución. Sin perjuicio de que en el supuesto de reutilizaciones efectuadas por operadores jurídicos esta exigencia parece excesiva, obligando a una precisión que jugará en detrimento de citas jurisprudenciales empobreciendo los diversos textos jurídicos y las fuentes de conocimiento cuando descansen en sentencias u otras resoluciones judiciales.

Descendiendo a nivel sistemático, centrado el Proyecto en las modalidades de gestión, regula las condiciones económicas en medio de la regulación de una de estas en lugar de hacerlo separadamente, al ser de aplicación tanto al régimen de autorización como al de licencia.

VII. Conclusión.

El proyecto sometido a informe y la imposición de un precio público incluso en caso de reutilización con fines no comerciales puede tener un efecto disuasorio en la real difusión de la jurisprudencia, que no sólo se realiza a través del CENDOJ sino también por medio de la reutilización no ocasional con fines informativos, docentes, culturales o científicos, contrario a los principios sobre los que descansa la Directiva 2003/98, en trámite de modificación.

El régimen instaurado descansa en la utilización de conceptos jurídicos indeterminados no delimitados suficientemente mediante contornos claros (difusión asilada, reutilización ocasional, etc) cuando de los mismos depende el régimen sancionatorio y disciplinario, abriendo un excesivo margen de discrecionalidad en las decisiones del CENDOJ y del CGPJ.

Se vuelve a un sistema de acceso limitado a sentencias a través del CENDOJ, sistema superado por el Reglamento 1/2005, introduciendo confusión en el régimen sancionador y disciplinario, diseñado sin suficiente cobertura legal.

³⁰ Artículo 8 d) de la Ley y régimen sancionador acorde con este requisito.